

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**



**SALA LABORAL**

Medellín, once (11) de junio de dos mil veintiuno (2021)

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede dentro del proceso ordinario radicado con el número 05 001 31 05 002- 2014 01535 01 promovido por i) **ROSALBA MONSALVE ACEVEDO**, ii) **CARLOS ANDRÉS RESTREPO MONSALVE**, iii) **MARIBEL DEL SOCORRO RESTREPO MONSALVE**, iv) **ANA MARÍA RESTREPO MONSALVE** y v) **PAOLA ANDREA RESTREPO MONSALVE**, contra i) **CH2 GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.** y ii) **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante frente a la sentencia emitida el 9 de junio de 2016 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín.

La decisión se adopta de forma escrita, de conformidad a las previsiones del decreto legislativo 806 de 2020, la cual fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala mediante providencia número 84.

**ANTECEDENTES**

Las pretensiones de la demanda buscan que se declare que entre el fallecido Libardo de Jesús Restrepo Vélez y la sociedad CH2 GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN, existió un contrato de trabajo por obra o labor contratada, del 20 de diciembre de 2013 al 3 de mayo de 2014, fecha del fallecimiento del trabajador. Así mismo, se declare que la señora Rosalba Monsalve Acevedo es titular de la pensión de sobrevivientes a carga de la demandada CH2 GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

En consecuencia, solicitan los accionantes se condene a CH2 GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S., a lo siguiente: **1)** reconocimiento y pago de la liquidación de prestaciones sociales y vacaciones por el tiempo laborado por el fallecido Libardo de Jesús Restrepo Vélez. **2)** horas extras durante todo el tiempo laborado. **3)** dominicales y festivos durante todo el tiempo laborado. **4)** indemnización moratoria del artículo 65 del CST. **5)** sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. **6)** perjuicios por la no dotación de calzado y vestido de labor. **7)** aportes a la seguridad social por todo el tiempo laborado. **8)** Pensión de sobrevivientes en favor de la señora Rosalba Monsalve Acevedo a partir del 3 de mayo de 2014, con las mesadas adicionales de junio y diciembre e intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. **9)** indexación de las condenas. **10)** costas del proceso.

Como fundamento de las pretensiones, se indicó que Rosalba Monsalve Acevedo y Libardo de Jesús Restrepo Vélez contrajeron matrimonio el 14 de febrero de 1976. Procrearon 4 hijos de nombres Carlos Andrés, Maribel del Socorro, Ana María y Paola Andrea Restrepo Monsalve, mayores de edad al momento de presentación de la demanda. Libardo de Jesús Restrepo Vélez laboró para la demandada CH2 GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. del 20 de diciembre de 2013 al 3 de mayo de 2014, desempeñando el oficio de vigilante nocturno en la obra Caffé Volumen Habitacional mediante contrato de prestación de

servicios, bajo las ordenes de Álvaro Jiménez y Tomás Chacón, quienes eran vinculados directamente con la sociedad demandada.

Afirman los accionantes que el señor Restrepo Vélez cumplía la jornada ordinaria de trabajo asignada por sus empleadores Álvaro Jiménez y Tomás Chacón, quienes le pagaban directamente un salario de \$1.533.000, y que pese a laborar más de 8 horas diarias, más domingos y festivos, no le reconocían el tiempo suplementario, así como tampoco le consignaron las cesantías en un fondo.

Indican que el señor Restrepo Vélez falleció el 3 de mayo de 2014 de manera natural, sin que en vigencia del contrato fuese afiliado a seguridad social, ni le suministraran dotación de uniforme y calzado de labor. Al momento del deceso convivía con su cónyuge Rosalba Monsalve Acevedo sin haber tenido separación alguna. No se ha pagado la indemnización del artículo 216 del CST, ni la pensión de sobrevivientes, ni las prestaciones sociales.

La accionada CH2 GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. se opuso a las pretensiones y presentó las excepciones de falta de causa para demandar, inexistencia de la obligación, compensación, buena fe del contratante, temeridad y mala fe de la demandante, prescripción, enriquecimiento indebido o incremento patrimonial indebido de la parte accionante, improcedencia de la indexación de las condenas y de las costas.

Así mismo, la accionada Colpensiones se opone a las pretensiones y presentó las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación, inexistencia de la obligación frente a la pensión de sobrevivientes e intereses moratorios, buena fe, imposibilidad de condena en costas.

En sentencia del 9 de junio de 2016, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín absolvió a la sociedad CH2 GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. de todas las pretensiones. Declaró probada la excepción inexistencia de la

obligación y condenó en costas a los demandantes en \$100.000 en favor de la sociedad accionada.

## **RECURSO DE APELACIÓN**

La parte demandante presentó recurso de apelación indicando que en este caso ni siquiera se requería la prueba testimonial para hablarse de contrato de trabajo y acceder a las pretensiones de la demanda. Si bien la Ley 80 de 1993 permitió la celebración de contratos de prestación de servicios, no se dan para todos los casos conforme al artículo 32 ibídem.

Dice que en este caso no se configura un contrato de prestación de servicios ya que, por la naturaleza del mismo no se da por la vinculación directa del contrato de trabajo. Para ser un vigilante como se afirmó en la demanda y se aceptó en la respuesta, no se reúnen los requisitos para que se dé un contrato de prestación de servicios. Se configuró un contrato realidad reglado por el artículo 23 del CST. La Ley 80 exige para los contratos de prestación de servicios, la afiliación a seguridad social, requisito que brilló por su ausencia. Según el interrogatorio al representante legal de la demandada se pudo notar que nunca estuvieron pendientes de este requisito.

Reitera que no era necesaria la prueba testimonial, en tanto bastó con la afirmación de los hechos de la demanda y la aceptación de la demandada para dictar sentencia favorable, por cuanto la documentación aportada por ambas partes fue más que suficiente para demostrar la realidad sobre las formas, de no hacerlo se desprotegen los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital, salud, entre otros derechos.

Alude al principio legal de adhesión, indicando que ha sido destacado por los administradores de justicia en casos similares, sustentando que es de lógica que el trabajador, en este caso el contratista fallecido, no tenía derecho a contradecir la

forma de su vinculación, y de hacer alguna exigencia, no se les permite la vinculación laboral, y ante la necesidad del trabajo prefieren adherirse a todas las condiciones de tiempo, modo y lugar plasmados en el contrato.

Resalta que se han conocido casos o sentencias similares donde se han ventilado procesos con las mismas pretensiones. Cita sentencia del DAS donde no se recepcionaron testimonios, el juez de primera instancia absuelve y fue revocada por el H. Tribunal Administrativo de Antioquia, aclarando que cuando es un contrato realidad basta con la prueba documental que esta aportada en el plenario.

Agrega que podría hablarse de una acción temeraria desplegada por el empleador al hacer este contrato para contratar un servicio de vigilancia donde se presta un servicio para la misma empresa. En la demanda se afirma que se prestó el servicio de manera personal, continua, ininterrumpida, se le pagaba un salario, prestaba un servicio en determinados días de la semana, lo cual fue aceptado y se cumple con lo consagrado en el art 23 del CST, se reúnen los requisitos legales para hablarse del contrato realidad.

Frente a la pensión de sobrevivientes indica que el fallecido laboró un lapso de 6 meses, y conforme al artículo 53 de la Constitución Política, se debería haber acogido la condición más beneficiosa y no desprotegerse el núcleo familiar, sino acceder a dicha prestación cuya finalidad es suplir la ausencia del causante. Solicita revocar y condenar a todas las pretensiones.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

Si bien la apoderada de Colpensiones allegó alegatos de conclusión, no se tendrán en cuenta por cuanto fueron presentados de manera extemporánea, atendiendo a que el auto que corrió traslado para alegatos se notificó por estados del 18 de

marzo de 2021, y el escrito de alegatos fue allegado al correo electrónico del despacho del magistrado ponente el 5 de marzo de hogaño.

## **PROBLEMA JURÍDICO**

Consiste en determinar si en el caso particular hay lugar a revocar la decisión revisada y con ello declarar la existencia de un contrato trabajo, del 20 de diciembre de 2013 al 3 de mayo de 2014, entre el señor LIBARDO DE JESÚS RESTREPO VÉLEZ y la compañía CH2 GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. De darse respuesta positiva, se analizará, como problema jurídico asociado, la procedencia o no de la causación y pago de cada uno de los conceptos laborales reclamados por los demandantes.

## **CONSIDERACIONES**

El análisis versará sobre lo que fue objeto de recurso conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 712 de 2001 que alude al principio de la consonancia, en virtud del cual la competencia de la segunda instancia se restringe a los puntos concretos de inconformidad.

Se afirma en la demanda que el fallecido Libardo de Jesús Restrepo Vélez laboró para la demandada CH2 GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S., del 20 de diciembre de 2013 al 3 de mayo de 2014. Por lo que afirmado dicho vínculo laboral les corresponde a los demandantes acreditar los supuestos para la configuración del mismo en los términos del artículo 23 del Código Sustantivo Laboral, siendo relevante el referido a la prestación personal del servicio, pues acreditado este entra a operar la presunción de contrato de trabajo contemplada en el artículo 24 ibídem, como una ventaja probatoria a favor de la parte más débil de la relación laboral, que puede ser desvirtuada por la contraparte,

demostrando que se trata de una relación contractual diferente o que el mismo no se dio.

Lo anterior significa, conforme a la jurisprudencia de la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia<sup>1</sup>, que a los demandantes les basta con probar la prestación o la actividad personal por parte del fallecido para que se presuma el contrato de trabajo, y es a la parte demandada a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción con la que queda beneficiado quien presta el servicio, lo que se traduce en un traslado de la carga probatoria, demostrando que la actividad contratada se ejecutó o realizó en forma autónoma, totalmente independiente y no subordinada, se itera, bajo un nexo distinto del laboral.

Ahora, es de advertir, que la presunción en comento, no releva a la parte actora de otras cargas probatorias, tales como acreditar los extremos temporales de la relación, el monto del salario, su jornada laboral, el trabajo en tiempo suplementario si lo alega, el hecho del despido cuando se demanda la indemnización por terminación del vínculo sin justa causa, entre otros. Al respecto indicó la H. Corte Suprema de justicia Sala de Casación Laboral, en sentencia del 06 de marzo de 2012:

“ (...) recuerda la Corte que la circunstancia de quedar demostrada la prestación personal del servicio, debiéndose presumir la existencia del contrato de trabajo en los términos del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, no releva al demandante de otras cargas probatorias, pues además le atañe acreditar ciertos supuestos trascendentales dentro de esta clase de reclamación de derechos, como por ejemplo los extremos temporales de la relación, el monto del salario, su jornada laboral, el trabajo en tiempo suplementario si lo alega, el hecho del despido cuando se demanda la indemnización por terminación del vínculo sin justa causa, entre otros.

De antaño se ha considerado como principio universal en cuestión de la carga probatoria, que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, obligando a su vez a quien pretende o demanda un derecho, que alegue y demuestre los hechos que lo gestan, o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba a la parte contraria, cuando se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su

---

<sup>1</sup> Ver sentencias CSJ SL, 13 abr. 2010, rad. 34223; SL4027-2017, SL 365 de 2019 y SL2976-2020, Radicación n.º 68876 del 11 de agosto de dos 2020, entre otras.

comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado.”<sup>2</sup>.

Esto en virtud del principio de la carga de la prueba o autoresponsabilidad, consagrado en los artículos 174 y 177 del CPC<sup>3</sup> hoy 164 y 167 del C.G.C, aplicable por remisión normativa del artículo 145 del C.P.T. y S.S. Es así como las partes están obligadas a probar el supuesto de hecho de las normas jurídicas que consagran el derecho que reclaman, manteniendo la obligación de aportar los soportes en que se basan sus afirmaciones, con las cuales pretenden se les reconozca un derecho, la aplicación de una norma, o un efecto jurídico particular, el no hacerlo conlleva inexorablemente a la negativa de éstos.

En desarrollo de tales preceptos normativos, la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia del 25 de octubre de 2011, radicado 37547 sostuvo:

“(...)La Sala considera que el Tribunal no distorsionó el verdadero sentido de la regla de juicio de la carga de la prueba, contenida en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil –aplicable al procedimiento del trabajo y de la seguridad social, merced a lo dispuesto en el artículo 145 del estatuto de la materia-, porque la carga de la prueba del tiempo servido por el trabajador al empleador la soporta el primero, de modo que la falta de demostración del tiempo de servicios comporta que no hay posibilidad para condenar al pago de prestaciones, salarios e indemnizaciones.”

Luego, examinada en su conjunto la prueba aportada, evidenciada la prestación personal del servicio por parte del fallecido a favor de la accionada, ejerciendo la labor de vigilante de manera personal durante el periodo 20 de diciembre de 2013 al 3 de mayo de 2014, se presume la existencia de relación laboral prevista en el artículo 24 de nuestro estatuto del trabajo, como se verá a continuación:

---

<sup>2</sup> En igual sentido, véanse las sentencias: rad. 36748 de 2009, SL9156-2015, SL11156-2017, SL4912-2020

<sup>3</sup> Vigentes al momento de presentación de la demanda



- Obra contrato de prestación de servicios titulado “CONTRATO DE VIGILANCIA PROYECTO CAFFE VOLUMEN HABITACIONAL” celebrado entre CH2 GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. como contratante, y el señor Libardo de Jesús Restrepo Vélez como contratista<sup>4</sup>. Como objeto del contrato se estipuló “EL CONTRATISTA, de manera independiente, sin subordinación o dependencia, utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, personal a su cargo, **prestará los servicios de vigilancia nocturna en la OBRA CAFFE VOLUMEN HABITACIONAL**”. El periodo contratado fue del 20 de diciembre de 2013 al 20 de junio de 2014, con unos honorarios de \$9.200.000 pagados mediante anticipos mensuales o quincenales, según las necesidades del contratista.
- Pagos por la prestación de “los servicios de vigilancia nocturna” que aparecen acreditados entre el 30 de diciembre de 2013 y el 22 de abril de 2014, con los comprobantes de egreso aportados por ambas partes por concepto de “celaduría” – “vigilancia” Edificio Caffe<sup>5</sup>.
- La accionada CH2 GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. al contestar la demanda, aceptó que el fallecido prestó el servicio de vigilancia desde el 20 de diciembre de 2013 al 3 de mayo de 2014, bajo un contrato de prestación de servicios de vigilancia nocturna en la obra Caffe Volumen Habitacional, resaltando que el periodo equivale a 4 meses 14 días<sup>6</sup>, y que la suma pagada era anticipos mensuales o quincenales por la prestación del servicio.

Si bien se niega que el señor RESTREPO VÉLEZ cumpliera horario, dicha negación se acompañó de la siguiente afirmación: “ya que los trabajadores de la obra terminan su jornada laboral a las 5:30 P.M. y es apenas a esta hora que comenzaba la vigilancia, hasta antes de la llegada del primer maestro de obra, la cual

---

<sup>4</sup> Fl. 64-65

<sup>5</sup> Fl. 47-53

<sup>6</sup> Ver respuesta al hecho 3° de la demanda fl. 79

su horario de trabajo comienza a las 7:00 A.M.”<sup>7</sup>, de tal manifestación se advierte claramente que el horario de este comenzaba a las 5:30 p.m. hasta las 7: am. Aceptó además que el fallecido “fue en todo momento una persona responsable, honesta y cumplidora de sus servicios como CONTRATISTA”.

- En el interrogatorio de parte rendido por el representante legal de la entidad demandada, señor Tomás Chacón Berna, este indicó frente a las condiciones del contrato con el fallecido: “nosotros teníamos una obra en la América llamada Caffé, sobre la cual evidentemente había que prestar servicio de vigilancia por las noches sobre todo que quedaba sola y básicamente buscamos una persona o una empresa que nos prestara el servicio de vigilancia por metas, bajo su autonomía y no necesariamente que estuviera allá presente sino que siendo él o cualquier otro que esta persona enviara se cumpliera el servicio de vigilancia por las noches”. Respecto a los pagos al fallecido aceptó que “se pagaba como adelanto al contrato que teníamos”.

Si bien niega que se le haya fijado un horario al señor LIBARDO DE JESÚS para prestar servicio de vigilancia, a la pregunta qué horario tenía dijo “no, o sea, nosotros digamos que cerrábamos obra dependiendo de las actividades que se tuvieran, a veces cerrábamos a las 5, 6, 4, 7, 8, 9 y básicamente lo que buscábamos es que una vez cerrábamos digamos que entrara esta persona o sociedad a prestar el servicio de vigilancia bajo su responsabilidad y su autonomía”. Agregó que “básicamente en las obras digamos que no hay un horario fijo”, pero admitió que siempre trabajaba en la noche y que el servicio de vigilancia se extendía “hasta el otro día”.

A la pregunta si el fallecido podía asignar sus funciones a otra persona y salir de su sitio de trabajo sin ser autorizado por su expreso “digamos que la responsabilidad recaía en que no pasara nada en la obra, pero podía ausentarse si”, aunque aceptó que no estuvo en la obra por lo que no sabe si el fallecido delegó sus funciones.

---

<sup>7</sup> Ver respuesta al hecho 6° de la demanda fl. 80

A la pregunta si el fallecido llegó a faltar alguna vez a laborar dijo “no te sabría decir, creo que no, yo no permanezco en la obra, creería que no”. A la pregunta si el fallecido podía faltar a la laborar dijo “había un cumplimiento de metas, si no se cumplían las metas se daba por terminado el contrato”. Agregó que durante el lapso trabajado por el señor LIBARDO DE JESÚS RESTREPO VÉLEZ no tuvo llamados de atención, y que este fue enviado a prestar el servicio “en una obra que teníamos en la America, Caffé”. Al interrogante de quién envió al fallecido a prestar el servicio en la obra Caffé dijo “la sociedad contrató”.

Si bien se argumentó en la respuesta a la demanda que la obligación del fallecido era afiliarse a seguridad social en su calidad de contratista, a la pregunta, si como contratante estuvo al tanto que se efectuara el pago, dijo que obraron de buena fe al no verificar que el fallecido estuviese afiliado a la seguridad social.

De las pruebas relacionadas queda claro que el señor Libardo de Jesús Restrepo Vélez fue contratado por la sociedad CH2 GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S., para prestar los servicios de vigilancia nocturna en la OBRA CAFFE VOLUMEN HABITACIONAL, labor que efectivamente se llevó a cabo por parte de aquel según se aceptó en la respuesta a la demanda y en el interrogatorio de parte rendido por el representante legal de la demandada, quien si bien alegó que ello fue en el marco de un contrato de prestación de servicios sin subordinación, ni cumplimiento de horario, en tratándose de la función de vigilancia, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que<sup>8</sup>:

«la función de celaduría no posee ningún nivel de autonomía e independencia que caracteriza el contrato de prestación de servicios, por el contrario, en esta clase de actividades el elemento asociado a la subordinación salta a la vista, pues el vigilante no puede decidir en qué

---

<sup>8</sup> Sentencia del Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección B, Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, Radicación número: 66001-23-33-000-2013-00468-01(2093-15) del 25 de mayo de 2017

lugares presta el servicio ni tampoco en que horarios, mucho menos se encuentra facultado para ausentarse del lugar de trabajo sin permiso.

En igual sentido esta subsección determinó en un caso de similar naturaleza que la subordinación y la dependencia se encuentran ínsitas en la labor que desarrollan los vigilantes o celadores, es decir, son consustanciales al servicio de cada entidad. Además, «si una persona presta servicios como vigilante - celador resulta inadmisibile afirmar que realiza actividades temporales e independientes, siendo que la labor contratada por la entidad exige que se brinde el servicio de seguridad en forma permanente para poder funcionar con total tranquilidad.”.

Bajo el contexto anterior, acreditada la prestación personal del servicio de vigilante, no le era exigible a los demandantes presentar pruebas adicionales al respecto, evidenciándose que la presunción consagrada en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo se activó y no fue desvirtuada en este caso por la parte demandada a quien le era exigible, tal como lo tiene adoctrinado la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, quien reiteró tal obligación en la sentencia SL2695-2020, Radicación n.º 75006 del 22 de julio de 2020, indicando:

“Así lo tiene adoctrinado esta Sala de la Corte que de manera pacífica ha enseñado: «acreditada la prestación personal del servicio, se presume la existencia de la subordinación laboral, por tanto, corresponde al empleador desvirtuarla demostrando que el trabajo se realizó de manera autónoma e independiente» (SL16528-2016), actuación que no desplegó la parte demandada, conforme lo que lo ilustró la Sala entre muchas en la sentencia CSJ SL2879-2019:

Así las cosas, para desvirtuar la presunción de existencia del contrato de trabajo, no hay que estarse a las denominaciones que una o ambas las partes le den al vínculo, o atenerse al rótulo que aparece en los documentos que se crean a partir de esa relación, sino en la naturaleza misma de la relación y la forma como se ejecutaron las prestaciones, para hallar lo esencial del contrato; esto último, fue lo que el juzgador encontró en las declaraciones entregadas por (...), sobre la forma como se desarrolló el vínculo, pues «...una disponibilidad de 24 horas para desarrollar sus funciones como Administrador [...] demuestra que medió subordinación jurídica, porque de qué otra forma se puede entender una disponibilidad en ese sentido, por lo tanto, se mantiene incólume la presunción legal...»

Las anteriores citas las comparte la sala en su integridad, pues la mera actividad descrita del identificado como “contratista” en el contrato de prestación de servicios, elimina cualquier viso de independencia y ausencia de subordinación, por lo que no basta que se indiquen dichas circunstancias en la convención respectiva para que sea liberatoria de las obligaciones propias del contrato de trabajo, salvo que dicha “independencia” sea demostrada por la parte accionada, lo cual no ocurrió en el caso que es objeto de la presente decisión.

No se desvirtuó la aludida presunción, en la medida que el único testimonio allegado por la parte demandada, esto es, el del señor Camilo Ospina Peinado, no demostró que el trabajo se realizó de manera autónoma e independiente por parte del fallecido. Contrario sensu, este indicó con respecto al cargo desempeñado por este, lo siguiente: “vigilancia, realmente no conozco directamente las funciones, generalmente era velar porque en la obra siempre estuviera alguien prestando servicio de vigilancia ya fuera él o una persona que él enviara en su reemplazo”. Agregó que el fallecido no recibía órdenes indicando que “su única labor era que estuviera vigilando o en su defecto, estuviera alguien de su confianza o alguien siempre en la obra prestando su vigilancia”. No precisó si el fallecido enviaba otras personas a su cargo a prestar el servicio de vigilancia, y al referirse a ello partió de suposiciones sin referir circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto a las actividades desarrolladas por el fallecido, razón por la cual no admitir su afirmación que el señor RESTREPO VÉLEZ tenía la potestad de delegar sus actividades laborales.

Así las cosas, ha de reiterarse que no fue desvirtuada la presunción de existencia del contrato de trabajo (artículo 24 C.S.T.), y por tanto se entenderá que este existió por el periodo del 20 de diciembre de 2013 al 3 de mayo de 2014, fecha del fallecimiento del señor Libardo Restrepo Vélez, y en consecuencia se REVOCARÁ la sentencia recurrida.

Como salario mensual se tomará la suma de \$1.533.000 indicada en la demanda, ello por cuanto en el “CONTRATO DE VIGILANCIA PROYECTO CAFFE VOLUMEN HABITACIONAL” celebrado entre la demandada CH2 GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. y el fallecido Libardo Restrepo Vélez, se estipuló como honorarios \$9.200.000 por el periodo 20 de diciembre de 2013 al 20 de junio de 2014, lo que equivale a \$1.533.333 mensual.

Partiendo de los presupuestos anteriores se examinará la procedencia de las demás pretensiones, aclarándose desde ya que no se configuró la excepción de prescripción propuesta por la demandada, por cuanto la relación laboral terminó el 3 de mayo de 2014 con el fallecimiento del trabajador<sup>9</sup> y la demanda fue presentada el 10 de noviembre de 2014<sup>10</sup>, sin que transcurrieran los tres años establecidos en los artículos 151 del CPT y de la SS y 488 del CST.

1. PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES

Tienen vocación de prosperidad dada la existencia del contrato de trabajo. Realizado el cálculo de las prestaciones sociales y vacaciones del 20 de diciembre de 2013 al 3 de mayo de 2014, se obtuvo la suma de \$1.452.049, así

CONCEPTO	SALARIO BASICO	DÍAS A LIQUIDAR	VALOR
Cesantía	1.533.000	134	570.617
Intereses a la cesantía	1.533.000	134	25.507
Prima de servicios	1.533.000	134	570.617
Vacaciones	1.533.000	134	285.308
TOTAL			1.452.049

<sup>9</sup> Fl.132

<sup>10</sup> Fl.35

Ahora, la accionada aportó con la contestación de la demanda prueba documental referente al pago realizado a la señora Rosalba Monsalve Acevedo, la cual obra a folio 98. Allí se indica con fecha del 6 de mayo de 2014 lo siguiente:

Por medio de la presente y como queda declarado con la firma, certifico haber recibido de parte de la empresa CH2 MANTENIMIENTOS SAS, la liquidación de contrato de prestación de servicios de mi padre el señor LIBARDO RESTREPO VÉLEZ.

El monto para tal efecto, es de dos millones cincuenta mil trescientos sesenta y nueve pesos (\$2.050.369).

Frente a tal documento no se presentó oposición alguna por la parte demandante, ni fue tachado en la oportunidad procesal pertinente, por lo cual se tendrá que, posterior al fallecimiento del trabajador se pagó la suma de \$2.050.369 por acreencias laborales, tova vez que no es posible asignarle ninguna otra connotación.

Se advierte que los salarios correspondientes al periodo laborado por el señor Libardo Restrepo Vélez entre el 20 de diciembre de 2013 y 3 de mayo de 2014 equivalen a \$6.847.400, más las prestaciones sociales acá liquidadas en \$1.452.049 arroja un total de **\$8.299.449**. De la prueba aportada por ambas partes se advierte que lo pagado por la sociedad demandada equivale a **\$7.725.322**:

FECHA	VALOR	FOLIO
30/12/2013	475.000	53 y 91
15/01/2014	756159	52 y 92
4/02/2014	833.640	51 y 93
19/02/2014	730.285	50 y 94
6/03/2014	609.199	49 y 95
21/03/2014	726.110	48 y 96
4/04/2014	715.300	47 y 97
22/04/2014	829.260	47 y 97
6/05/2020	2.050.369	98
TOTAL	\$7.725.322	

Luego, después de lo pagado por la entidad accionada, queda en favor de los demandantes la suma **\$574.127** por prestaciones sociales adeudas al fallecido.

## 2. INDEMNIZACIÓN MORATORIA DEL ARTÍCULO 65 DEL CST.

Sobre la procedencia de esta sanción, la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en su línea jurisprudencial, ha precisado con vehemencia, que la imposición de la indemnización moratoria no es automática, siendo la buena fe eximente<sup>11</sup>.

La Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 23 de junio de 1958, adocrinó el alcance del concepto de buena fe, definiéndolo así: "La buena fe se ha dicho siempre que equivale a obrar con lealtad, con rectitud, de manera honesta, en contraposición con el obrar de mala fe; y se entiende que actúa de mala fe "quien pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de probidad o pulcritud".

Ha precisado esa alta Corporación, que el análisis de la buena fe patronal se enmarca a la fecha de terminación del contrato, debiendo demostrarse en el proceso que la falta de pago de salarios y prestaciones sociales en dicho momento, obedece a razones serias, objetivas, sin ánimo de defraudar al trabajador, que puedan calificarse de buena fe.

En este caso, el recaudo probatorio deja en evidencia que la parte demandada, al momento de la terminación del contrato de trabajo, actuó en el marco de los postulados de la buena fe, en tanto el 6 de mayo de 2014 pagó lo que creyó deber por las acreencias laborales que se habrían causado, en un contrato de trabajo, a favor del trabajador fallecido (documento obrante como prueba en el expediente, folio 98), y si bien a la fecha de esta sentencia existe un saldo insoluto de \$574.126 es claro que no hubo falta de pago sino un pago deficitario, por lo que

---

<sup>11</sup> Estas subreglas se han definido en las siguientes sentencias de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral: N° 25.713 del 6 de diciembre de 2006, N° 35.790 del 25 de mayo de 2010, SL 665 de 2013 y N° 46.289 SL 6441 del 15 de abril de 2015, SL1843-2021, Radicación n.º 76910 del 12 de mayo 2021 y SL1984-2021, Radicación n.º71331 del 26 de mayo 2021, entre otras.



se absolverá de la indemnización pretendida, máxime cuando en este caso se declaró la existencia del contrato de trabajo en virtud de la presunción establecida en el artículo 24 del CSJ y no por prueba directa.

Por tanto dicha buena fe se reconoce para el momento de la terminación del contrato de trabajo, y consecuentemente se absuelve de dicha pretensión.

### 3. INDEMNIZACIÓN DEL ARTÍCULO 99 DE LA LEY 50 DE 1990

La obligación de consignar las cesantías en la cuenta individual que el trabajador elija para ello, está consagrada en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, según dicha norma, el empleador que omita la obligación allí establecida, deberá pagar una indemnización al trabajador consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta que suceda una de tres cosas: 1). Que cumpla la obligación de consignar, 2). Que termine la relación laboral, caso en el cual se genera la obligación de pagar las cesantías directamente al trabajador, o 3). Que llegue la fecha de consignación del siguiente período.

En el caso que se analiza se advierte que el empleador no consignó las cesantías del único periodo para el cual surgió la obligación, por lo cual habrá de condenarse a dicha sanción teniendo en cuenta que las del 2013 tenían que estar consignadas al 14 de febrero de 2014 y que para las del 2014 no se generó la obligación de consignación dado que la relación laboral terminó el 3 de mayo de 2014 por el fallecimiento del trabajador, surgiendo en ese momento la obligación de pago de las mismas por el fenecimiento del vínculo laboral.

Así las cosas liquidada la sanción por la no consignación de las cesantías del 2013, la cual va del 15 de febrero al 3 de mayo de 2014, esto es, 79 días a razón de \$51.100 diarios, se obtuvo la suma de **\$4.036.900.**

La condena en este punto se impone, en la medida que la buena fe que esta providencia reconoce en favor de la parte accionada, se circunscribe para el momento de la terminación del contrato de trabajo, pero no ocurrió lo mismo para la calenda en que tenía el deber legal de consignar el auxilio de la cesantía correspondiente al año 2013.

#### 4. HORAS EXTRAS, DOMINGOS Y FESTIVOS DURANTE TODO EL TIEMPO LABORADO.

Dicha pretensión se funda en que el horario del fallecido era de 4:00 pm a 8:00 am, los días lunes, martes miércoles, jueves, sábado y domingo, los sábados de 10:30 am a 8:30 am del domingo<sup>12</sup>, sin embargo, de la prueba allegada no es dable determinar el total de horas extras, dominicales y festivos que supuestamente laboró el fallecido, pues los declarantes traídos a este juicio por la parte demandante nada dicen sobre el particular, en tanto la señora Fabiola Marín de González no tiene conocimiento sobre el contrato del fallecido con la empresa demandada demanda, y el señor Wilfer Mauricio Gómez Giraldo no conocía el lugar donde él fallecido prestó el servicio, pues este indicó “él me decía que trabajaba en la América, pero nunca llegué a asistir al puesto de trabajo”, lo que lo convierte en testigo de oídas, esto es, el que relata hechos que no ha percibido por sus propios sentidos y que sólo conoce por el dicho de otras personas, razón por la cual su declaración carece de eficacia probatoria.

De ahí que, no se demostró cuántas y cuáles fueron las extras extras, dominicales y festivos laboradas y no pagadas, y al desconocerse lo anterior no es posible suponer datos de los cuales no existe prueba en el proceso. Clara es la jurisprudencia nacional de la H. Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que la prueba para demostrar el trabajo suplementario debe ser de una definitiva claridad y precisión y no es dable al juzgador hacer cálculos o suposiciones para deducir un número plural de horas trabajadas, carga de la

---

<sup>12</sup> Hecho sexto de la demanda

prueba que le corresponde a quien invoca el hecho<sup>13</sup>. Razón por la cual se absolverá de dicha pretensión.

## 5. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL POR TODO EL TIEMPO LABORADO.

Según el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un servicio público que se debe garantizar a todos los habitantes del territorio nacional, tiene carácter obligatorio y es irrenunciable. Con el fin de reglamentar el ejercicio de este derecho constitucional, se promulgó la Ley 100 de 1993 o Sistema de Seguridad Social Integral, el cual incluyó el sistema general de pensiones, de salud y de riesgos profesionales, cuyos objetivos fueron dispuestos en el artículo 6° de la referida norma.

Conforme al artículo 15 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 3° de la Ley 797 de 2003, que trata sobre los afiliados al Sistema General de Pensiones, y al artículo 157 ibídem, que tiene que ver con los tipos de Participantes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, es de advertir que en el caso de las personas vinculadas mediante contrato de trabajo, corresponde al empleador, no sólo efectuar la afiliación al sistema general de seguridad social, sino pagar los respectivos aportes a cada subsistema, en los porcentajes que indica la norma. Al respecto, el artículo 22 de la Ley 100 de 1993, establece que dentro de las obligaciones en cabeza del empleador radica la de descontar del salario del trabajador el valor correspondiente a los aportes obligatorios y trasladar dichas sumas a la entidad respectiva.

Del análisis de la prueba obrante en el proceso, se desprende que en favor del señor Libardo de Jesús Restrepo Vélez, existen unos periodos laborados y no

---

<sup>13</sup> Ver sentencias tales de marzo 2 de 1949, 15 de junio de 1949, 16 de febrero de 1950, 15 de marzo de 1952, diciembre de 1983, SL1772-2021, Radicación n.º85884 de 12 de mayo de 2021 y SL2005-2021, Radicación n.º 82689 del 24 de mayo de 2021, entre otras.

cotizados del 20 de diciembre de 2013 al 3 de mayo de 2014, los cuales, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, generan un cálculo actuarial que da la posibilidad de trasladar al Sistema General de Pensiones una reserva actuarial, en tanto el empleador omitió el deber de afiliarlo; con ello pretende el legislador que esas semanas se contabilicen para todos los efectos prestacionales. No obstante dicha contabilización, de conformidad con el Parágrafo del artículo 33 ibídem<sup>14</sup> y el inciso 6 del artículo 17 del Decreto 3798 de 2003, sólo se materializa si se traslada el valor de la reserva actuarial o el título pensional respectivo, según proceda, a satisfacción de la entidad administradora seleccionada por el trabajador.

Así las cosas, se condenará a la accionada CH2 GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. a pagar el cálculo actuarial por los periodos laborados por el señor Libardo de Jesús Restrepo Vélez y no cotizados del 20 de diciembre de 2013 al 3 de mayo de 2014, con base en un salario mensual de \$1.533.000 para cada periodo, conforme a la normatividad citada.

El cálculo actuarial deberá ser cancelado a Colpensiones previa liquidación que realice ésta, pues fue la última administradora de pensiones donde estuvo afiliado el fallecido, según se advierte de las historias laborales obrante de folios 36-40.

---

<sup>14</sup> “.....Para efectos del cómputo de las semanas, se tendrá en cuenta:

- a) El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones;
- b) El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados, incluyendo los tiempos servidos en regímenes exceptuados;
- c) El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.
- d) El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador
- e) El número de semanas cotizadas a cajas previsionales del sector privado que antes de la Ley 100 de 1993 tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión.

En los casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional.....”

Dicha entidad deberá realizar la liquidación del referido calculo, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, y notificarla a la demandada CH2 GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S., para que proceda con su pago.

Ahora, respecto a los aportes a los sistemas de salud y riesgos laborales, indicó la H. CSJ en sentencia SL2695-2020, Radicación n.º 75006 del **22 de julio 2020**:

“Esta Corporación ha enseñado que, cuando el empleador omite la afiliación a estos regímenes del sistema integral de seguridad social, lo que procede es la reparación de los perjuicios que el trabajador acredite haber sufrido, o el reintegro de los gastos que se vio obligado a pagar por no obtener las prestaciones económicas o asistenciales (CSJ SL 3009-2017). Como en el caso bajo análisis no se aportó prueba que permita corroborar que el trabajador incurrió en gastos o sufrió perjuicio cierto no hay lugar a impartir condena.”

Perjuicios que en este caso no fueron demostrados, por lo que se absolverá de dicha pretensión.

## **6. PERJUICIOS POR LA NO DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR.**

Se negará dicha pretensión de conformidad con los artículos 174 y 177 del CPC, hoy 167 del CGP, en tanto la parte demandante no cumplió con la carga de demostrar los perjuicios reclamados por la supuesta omisión del empleador de dotar al fallecido con calzado y vestido de labor.

## **7. PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES**

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han reconocido que por regla general y salvo ciertas excepciones, el régimen jurídico aplicable para el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes es el vigente al momento del fallecimiento del afiliado o

pensionado, considerando que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no consagró un régimen de transición en relación con la misma.

Se probó en el plenario que el señor Libardo de Jesús Restrepo Vélez falleció el 3 de mayo de 2014<sup>15</sup>, En éste contexto, la norma que en su momento regía las condiciones del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes era la Ley 797 de 2003, artículo 12, que exige 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores al fallecimiento, dado que el requisito de fidelidad al sistema fue declarado inexecutable en la sentencia C-556 de 2009.

Requisito de semanas que no dejó acreditado el causante según se advierte de su historia laboral<sup>16</sup>, pues le aparecen cotizaciones hasta julio de 2001 por 264,57 semanas, y las semanas por el periodo laborado con la demandada entre el 20 de diciembre de 2013 y el 3 de mayo de 2014 equivalen a 19,14, lo que no permite la acusación del derecho.

Ahora, la recurrente indica que conforme al artículo 53 de la Constitución Política, se debería haber acogido la condición más beneficiosa. Respecto a la aplicación de este principio en pensiones de invalidez y sobrevivientes, debe mencionarse la sentencia SL-4650-2017 que fija la nueva doctrina sobre su aplicación en el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, define los supuestos en que debe reconocerse la prestación y explica cómo operaba tal principio en determinadas situaciones, lo cual se reiteró en sentencias SL2358-2018 y SL1341-2019, entre otras.

Se destaca que la relación laboral vigente al momento del deceso del causante lo asemeja a un cotizante activo para el momento del infortunio, y en ese contexto su caso se ubicó en la hipótesis 4.2 de la sentencia SL-4650-2017, esto es, **no estar cotizando al momento del tránsito legislativo entre las Leyes 100 de**

---

<sup>15</sup> Fl. 132

<sup>16</sup> Fl.36-40

**1993 y 797 de 2003, pero estarlo a la fecha de su fallecimiento**, caso en el cual sería procedente la pensión de sobrevivientes si el afiliado al momento del cambio legislativo -29 de enero de 2003- no estaba cotizando al sistema pero había aportado 26 o más semanas en el año inmediatamente anterior, esto es, entre el 29 de enero de 2002 y el 29 de enero 2003, periodo en que el no se evidencia ninguna semana cotizada.

Requisito que también se exigió en la sentencia SL2358-2017 al estudiarse los supuestos para conceder la pensión de invalidez en desarrollo del principio de la condición más beneficiosa, donde se indicó que, “si el afiliado al momento del cambio legislativo, esto es, 26 de diciembre de 2003, no estaba cotizando al sistema y tampoco había aportado 26 o más semanas en el año inmediatamente anterior, esto es, entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2002, no posee una situación jurídica concreta”.

Aunado a ello, al aplicar el precedente al caso del fallecido, es claro que, al haberse producido el deceso el 3 de mayo de 2014, es decir, con posterioridad al 29 de enero de 2006, fecha hasta la cual “es posible que la Ley 797 de 2003 difiera sus efectos jurídicos, exclusivamente para las personas con una expectativa legítima” (SL4650-2017), no le asiste el derecho a la aplicación de la condición más beneficiosa por el tránsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y la 797 de 2003, pues conforme a los nuevos parámetros establecidos por la Corte, el causante no alcanzó a satisfacer las exigencias para que su cónyuge pudiera acceder a la pensión de sobrevivientes, bajo la figura de la condición más beneficiosa, en tanto la fecha de su muerte imposibilita la aplicación de los criterios demarcados en dicho precedente.

Dado lo anterior, al no acreditarse la procedencia de la aplicación del principio de condición más beneficiosa, se confirmará la sentencia.

## 8. INDEXACIÓN

Para la Sala es procedente por razones de justicia y equidad, toda vez que con la indexación no se pretende una ganancia, sino la actualización del valor que se debía pagar, es decir que la indexación no implica el incremento del valor de los créditos, sino únicamente recuperar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda en las economías inflacionarias como a colombiana con la consecuente reducción del patrimonio del acreedor, causada por el transcurso del tiempo.

Por lo que tendiendo a lo anterior, esto es, la notoria pérdida de poder adquisitivo de la moneda en Colombia, se debe indexar el valor adeudado para que se satisfaga al acreedor sus derechos en los mismos términos que cuando debió pagarse la deuda. Tal actualización debe materializarse, en este caso, al momento de hacerse efectivo el pago de las obligaciones reconocidas en la sentencia, en lo referente a prestaciones sociales y vacaciones.

La indexación deberá ser calculada por la demandada CH2 GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. al momento del pago, tomando para ello el valor del IPC certificado por el DANE, entre la fecha de causación y el momento del pago, aplicando la siguiente fórmula:

$$\text{Indexación} = \frac{\text{Índice final}}{\text{Índice inicial}} \times \text{valor a indexar} - \text{valor a indexar}$$

Costas en ambas instancias a cargo de la parte demandada **CH2 GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.**, se fijan las agencias en derecho en esta instancia en la suma de \$ 908.526 en favor de los demandantes.

No se condena en costas a COLPENSIONES, en la medida que fue convocada a juicio para recibir el valor de las cotizaciones pensionales respectivas.



Es pertinente dejar sentado, que las condenas acá impuestas son en favor de los demandantes en calidad de esposa y herederos del causante, señor LIBARDO DE JESÚS RESTREPO VÉLEZ, porque el importe de las condenas era de propiedad de este trabajador fallecido y no un derecho directo de los demandantes, quienes lo reciben como sus sucesores.

Las excepciones propuestas por las demandadas quedaron implícitamente resueltas en párrafos precedentes.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: REVOCAR** la sentencia del 9 de junio de 2016 apelada por la parte demandante, y en su lugar se **DECLARAR** que entre el señor Libardo de Jesús Restrepo Vélez y la demandada **CH2 GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN**, existió un contrato de trabajo del 20 de diciembre de 2013 al 3 de mayo de 2014, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

**SEGUNDO: DECLARAR** improbada la excepción de prescripción. Las demás quedaron implícitamente resueltas, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

**TERCERO: CONDENAR** a la demandada **CH2 GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.** a pagar a los demandantes i) **ROSALBA MONSALVE ACEVEDO**, ii) **CARLOS ANDRÉS RESTREPO MONSALVE**, iii) **MARIBEL DEL SOCORRO RESTREPO MONSALVE**, iv) **ANA MARÍA RESTREPO MONSALVE** y, v) **PAOLA ANDREA RESTREPO MONSALVE** en calidad de esposa y herederos del

causante de las acreencias, la suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL VEINTISIETE PESOS (**\$4.611.027**), por los siguientes conceptos:

SALDO DE PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES	\$574.127
INDEMNIZACIÓN ARTÍCULO 99 LEY 50 DE 1990	\$4.036.900
TOTAL	<b>\$4.611.027</b>

Valores que deberán ser indexado al momento del pago en la forma indicada en la parte motiva de la presente providencia.

**CUARTO: CONDENAR a CH2 GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN** a pagar a **COLPENSIONES** el cálculo actuarial por los periodos laborados por el señor Libardo de Jesús Restrepo Vélez y no cotizados del 20 de diciembre de 2013 al 3 de mayo de 2014, con base en un salario mensual de \$1.533.000 para cada periodo, previa liquidación que realice Colpensiones, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

**QUINTO: ORDENAR a COLPENSIONES** que realice, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, la liquidación del cálculo actuarial por los periodos laborados por el señor Libardo de Jesús Restrepo Vélez y no cotizados del 20 de diciembre de 2013 al 3 de mayo de 2014, con base en un salario mensual de \$1.533.000 para cada periodo, y se la notifique a la demandada **CH2 GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.**, para que proceda con su pago, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

**SEXTO:** Costas en ambas instancias a cargo de la parte demandada **CH2 GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.**, se fijan las agencias en derecho en esta instancia en la suma de \$ 908.526 en favor de los demandantes.

**SÉPTIMO: ABSOLVER a CH2 GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.** y a **COLPENSIONES** de las demás pretensiones incoadas por los

demandantes, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Lo resuelto se notifica en **ESTADOS**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Se ordena regresar el expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL  
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA  
LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados  
N ° 102 de Junio 15 de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

**Firmado Por:**

**JAIME ALBERTO ARISTIZABAL**

**GOMEZ**

**MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL**

**SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-  
ANTIOQUIA**

**JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ**

**MAGISTRADO**  
**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA**  
**CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**FRANCISCO ARANGO TORRES**  
**MAGISTRADO**  
**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA**  
**CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez  
jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario  
2364/12

Código de verificación:

**02b80b02c6fa138b2fe619aef99642c4e640d39ed295d3d1fb9b6d737b5cc955**

Documento generado en 11/06/2021 03:44:00 PM